
LA VIOLENCIA REGIONAL Y SUS PROTAGONISTAS: EL CASO DE URABA

Ana María Bejarano*

La noticia de las masacres de campesinos ocurridas en Urabá entre marzo y abril de este año estremeció al país entero. Entonces, ese país adormecido por la violencia cotidiana volvió los ojos hacia la región. Y encontró que, lejos de constituir un hecho aislado, las masacres son solamente el más reciente episodio en una larga historia de conflictos sociales, económicos y políticos ligados a la problemática global del país y, sobre todo, a sus propias condiciones de desarrollo regional.

La región de Urabá, ubicada en el extremo noroccidental del departamento de Antioquia, constituye hoy una de las zonas más críticas del país dados los niveles que allí ha alcanzado la violencia, y quizá el más dramático ejemplo de un futuro no muy lejano para la mayoría de las regiones colombianas en conflicto.

La profundización del estudio en el caso de Urabá obedece a dos razones principales: en primer lugar, porque constituye un caso en extremo grave dentro del conjunto de regiones azotadas por la violencia, resulta urgente intentar una explicación sobre los factores que han llevado a la agudización creciente de los conflictos en la zona; en segundo lugar, porque

esta explicación permite establecer similitudes y paralelos con algunas de las regiones que conforman el mapa de la violencia contemporánea en el país y, en esa medida, se convierte en una herramienta útil para el análisis más amplio de la geografía de los conflictos violentos en Colombia.

Elementos para el análisis del conflicto

Urabá es una zona de colonización reciente. El proceso de ocupación de sus tierras se dio en forma lenta entre los años veinte y cincuentas, como consecuencia de una primera oleada de migración de campesinos cordobeses que, atraídos por la abundancia de tierras baldías, llegaron a Urabá por el oriente y desarrollaron allí una agricultura tradicional de subsistencia (1). A partir de los años cincuentas, el ritmo de migración aumentó dando lugar a una colonización masiva de la zona.

Tres factores simultáneos parecen haber jalado este proceso durante las décadas del cincuenta y el sesenta: el primero fue la construcción de la carretera al mar que comunica a Medellín con Turbo, cuya finalización solo fue lograda hasta mediados de la década del cin-

* Polítóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

1. Carlos Muñoz, *Problemas de Urabá*, Medellín, Imprenta Oficial, 1931, pp. 95-107.

cuenta (2). Esta carretera posiblemente condujo a esa región un buen número de familias campesinas de Antioquia y el Viejo Caldas que huían de la violencia en la zona cafetera. El segundo impulso provino de la expulsión masiva de campesinos de los valles del río Sinú, promovida por el agotamiento de las antiguas sabanas y bosques naturales, la modernización agrícola inducida por las políticas agrarias de los años sesentas y setentas, y la gran expansión del latifundio ganadero (3). Finalmente, el nacimiento de la industria bananera y su auge temprano constituyen el tercer factor que contribuyó a promover el proceso de colonización de la región, gracias a las expectativas generadas por la primera bonanza de los años sesentas (4). Los capitalistas antioqueños se interesaron en la región precisamente movidos por este último factor. Es así como la colonización antioqueña de Urabá, ocurrida a principios de los años sesentas, debe ser considerada como una colonización de nuevo tipo, básicamente empresarial.

Como resultado de este proceso de migración, la población de Urabá se quintuplicó entre 1951 y 1964 (5), dando origen a una compleja socie-

dad donde conviven diversos grupos humanos originarios de varias regiones del país con diferencias culturales profundas. La población actual de la zona estaría compuesta de la siguiente forma, según un estudio reciente realizado por Julián Delgadillo: el 47 por ciento de los inmigrantes de la zona procede de toda la Costa Atlántica (sin contar los de Córdoba); el 22 por ciento procede de los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle, siendo predominante la migración de antioqueños; el 16 por ciento proviene del Chocó y del mismo Urabá por el oeste desde Bajirá; el 10 por ciento son inmigrantes desde el vecino departamento de Córdoba; el 5 por ciento restante está conformado por población indígena (Cunas, Emberás y Senúes) paulatinamente desplazada al sur, a la periferia como Caimán Nuevo y a la costa occidental del Golfo de Urabá (6).

El grupo de propietarios-empresarios provino esencialmente de Antioquia. El resto de grupos inmigrantes, de origen campesino, contribuyó al desmonte y a la colonización de la selva tropical que posteriormente sería ocupada por las plantaciones de banano. Hoy en día conforman el grueso de la mano de obra empleada en ellas, así como el cinturón de economía campesina que alimenta las zonas bananera y ganadera con su incipiente producción parcelaria de bienes básicos.

La economía de la región de Urabá gira principalmente en torno al cultivo comercial del banano, cuya producción para la exportación representa el 76 por ciento del Valor Agregado agrícola de la región (7). Los siguientes datos contribuyen a dar una idea de la importancia que tiene la producción bananera no solo para la región misma o para el departamento de Antioquia, sino para el país en general. Colombia está entre los cuatro primeros exportadores de banano del mundo (8) con una producción anual que se acerca al millón de toneladas, con un valor cercano a los 200 millones de dólares (9). Esta producción anual de banano para

2. El prolongado proceso de construcción de la carretera al mar (Medellín-Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas-Dabeiba-Mutató-Chigorodó-Apartadó-Turbo), es indicativo del dificultoso proceso de colonización de Urabá previo al "milagro bananero". Ver James J. Parsons, *Urabá: salida de Antioquia al mar*, Medellín, s.e., 1979. El trabajo de Julián Delgadillo también da cuenta de algunos de los esfuerzos realizados por antioqueños para colonizar a Urabá y construir la carretera que comunicará la región central de Antioquia con el Darién. Ver Julián Delgadillo, "La violencia en Urabá", Universidad Javeriana, Departamento de Historia, noviembre de 1987. Ponencia presentada en el VI Congreso de Historia de Colombia realizado en Ibagué.
3. Un análisis del proceso de expulsión del campesinado costeño se encuentra en, Alejandro Reyes Posada, "La violencia y el problema agrario en Colombia", en *Análisis Político*, No. 2, septiembre a diciembre de 1987, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, pp. 33-34.
4. Las primeras plantaciones de banano aparecen en 1959 cuando la United Fruit Company por medio de su subsidiaria en Santa Marta (la Compañía Frutera de Sevilla) decide iniciar un programa de banano en Turbo. Siete años más tarde (en 1966) se estaban exportando hacia el mercado europeo entre 30.000 y 70.000 racimos cada semana. "De la noche a la mañana el banano se volvió un gran negocio en Urabá". Parsons, *Urabá: salida de Antioquia...*, p. 105.
5. Según el censo de 1951, la población de la región era de 15.700 personas; para el censo de 1964, se registraron 77.000. En 1963 el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, calculó la tasa de crecimiento anual de la zona de Urabá en 9.4 por ciento, siendo inmigrantes 3 de cada 4 nuevos residentes. Parsons, *Urabá: salida de Antioquia...*, pp. 127 y 128. Si se compara el dato de 1951 (15.700), con el que resul-

- ta del Censo de 1985 (239.892), se tiene que en los últimos 34 años la población de Urabá se multiplicó 15 veces. DANE, "Indicadores de pobreza", 1988 (Listados de Computador).
6. Julián Delgadillo, "La violencia en Urabá"..., s. p.
7. Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, CORPOURABA, "Plan de Desarrollo de Urabá", Medellín, Oficina de Planeación, julio de 1983, p. 3.
8. *El Tiempo*, 19 de marzo de 1988, p. 14-E.
9. *El Espectador*, 29 de mayo de 1988, p. 4-D.

la exportación proviene en más de un 70 por ciento de la zona de Urabá (10), y esta sola representó más del 48 por ciento del valor anual total de las exportaciones menores de Antioquia en el período 1985-1987 (11). Es indudable que los demás procesos económicos, políticos y sociales de la región son arrastrados y dominados por el peso de la agroindustria del banano con fines de exportación.

Sin embargo, y a pesar de lo alentadoras que puedan sonar las cifras, la expansión del cultivo comercial de banano no ha traído a la región los frutos esperados. Según un documento oficial sobre la región, "mientras que esta expansión ha implicado la prosperidad de las grandes empresas bananeras del sector exportador a ellas vinculado, las desigualdades sociales se han venido agudizando de manera preocupante: los beneficios del crecimiento no se han traducido en un mejoramiento sensible de los ingresos y de las condiciones de vida de la población" (12). Esto se explica fundamentalmente gracias a las características que ha asumido allí el proceso de producción de este cultivo primario-exportador y a la modalidad de su inserción en la economía nacional, que han configurado en Urabá una economía de enclave. En este sentido, esta región se asemeja a otras en el país con economías de este tipo (Putumayo y Arauca con el petróleo, el Bajo Cauca con el oro, y el Río Minero con las esmeraldas), y comparte con ellas algunos de los problemas típicos que se derivan de esta especial configuración del proceso económico.

La producción de banano para la exportación supone un alto componente de inversión de capital no solo para la compra de tierras sino por el nivel de desarrollo tecnológico y los costos que implican la difícil localización del recurso, el acceso a los mercados externos y las exigencias internacionales para la compra del producto final. Tales capitales, inexistentes en la región, debieron provenir de fuera de ella, en este caso de los empresarios del centro de Antioquia, incentivados por el nuevo esquema de

créditos y comercialización implantado por la United Fruit Company a finales de la década del cincuenta (13). De allí que el proceso de producción haya estado, hasta hoy, bajo el control de empresarios radicados fuera de la región (principalmente en Medellín), que a su vez mantienen vínculos de dependencia con las compañías multinacionales extranjeras que continúan regulando la comercialización del banano en el exterior y fijando los precios del producto (14). La irrupción de este capital, "de gran magnitud, orientado a una realización en los mercados externos, con una gran expectativa de acumulación para cumplir con las exigencias progresivas de la competitividad externa" (15) produjo un veloz y traumático reordenamiento de las relaciones sociales de producción en toda la región. Pero además ha traído los efectos nocivos típicos de toda producción de enclave. Estos se refieren básicamente al hecho de que al estar controlada la producción por fuerzas exógenas a la región, los excedentes allí generados nunca se reinvierten en ella, con lo cual se ocasiona un drenaje intensivo de sus recursos en desmedro de la incorporación de los efectos del crecimiento que debería acompañar al proceso productivo en la región misma.

A esto se suma el hecho de que, al depender de un solo cultivo, la economía de toda la región queda sujeta a las fluctuaciones de ese producto principal. No existe otro producto que pueda amortiguar los efectos de tales variaciones. Es por esta razón que los desequilibrios en el or-

13. La United Fruit Company, que tenía conocimiento del potencial de Urabá para la producción de banano, inició sus actividades allí en 1959, cuando abandonó la región de Santa Marta. Y no lo hizo siguiendo el mismo esquema que había utilizado en el Magdalena, sino el de productores asociados. El cambio estratégico elegido por la UFCO fue el de abandonar los riesgos que traía consigo la producción, dejándolos a los cultivadores nacionales independientes pero monopolizando el área más rentable de la comercialización. Ver Gerard Martin, "Desarrollo económico, sindicalismo y proceso de paz en Urabá", Universidad de los Andes, Facultad de Administración, agosto de 1986, pp. 8-12.

14. La comercialización del banano de Urabá hasta el puerto de destino está hoy en manos de 3 comercializadoras nacionales (UNIBAN, PROBAN y BANACOL). No obstante, la venta final del producto sigue estando sujeta a las condiciones impuestas por las grandes transnacionales que manejan el mercado mundial. Ver *Ibid.*, p. 10 y Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, CORPOURABA, "Plan de Desarrollo...", p. 3.

15. William Ramírez Tobón, "Violencia y conflicto social en Urabá", proyecto de investigación, 1988, p. 1.

10. Margarita Jiménez y Sandro Sideri, *Historia del desarrollo regional en Colombia*, Bogotá, CEREC-CIDER, 1985, p. 141.

11. *El Tiempo*, op. cit.

12. *El Plan Social por la Paz una estrategia de participación comunitaria*, Bogotá, DANE-DAPRE, julio de 1986, p. 18.

den social y económico generados por la economía del enclave bananero se extienden a toda la región, incluyendo aquellos municipios que no se dedican prioritariamente al cultivo comercial de esta fruta (16). El ganado, el arroz, el maíz, el cacao, la palma de aceite y la madera, son otros de los productos que crecen en Urabá "a la sombra del banano".

La economía campesina, que todavía absorbe la mayor cantidad de mano de obra (17), tampoco escapa a las reglas del juego que le impone la agroindustria bananera. Esta, que se ha apoyado en la existencia de una extensa red de producción campesina que provee a las plantaciones bananeras de alimentos, y en alguna medida de mano de obra, no ha generado un mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños campesinos parcelarios. Su relación se desenvuelve en una dinámica "conflicto-complementación" en la cual la economía campesina resulta perjudicada dadas "por una parte, la debilidad gremial campesina y, por otra, las severas restricciones que afectan al desarrollo agrícola, como son los elevados costos de la renta territorial, de los insumos y el crédito, las dificultades del mercado interno, etc." (18).

Esta contradicción entre la economía de enclave y el resto de procesos sociales y económicos que se desenvuelven en la región, se ha visto agravada por el tipo de presencia que ha tenido el Estado en la misma. Su acción, en lo que concierne a la redistribución de recursos y a la prestación de servicios públicos y sociales, no solo ha sido débil sino que se ha concentrado en el favorecimiento de la producción bananera. Según la misma Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, CORPOURABA, encargada de reorientar el gasto público para el desarrollo de la región, la inversión pública, no solo ha sido reducida sino que además "ha estado principalmente dirigida a satisfacer las necesidades de la producción y su transporte..." (19). Así, en lugar de redistribuir recur-

sos, el Estado ha contribuido a concentrarlos, agravando el desfase que existe entre el enclave bananero por una parte, y las demás actividades económicas y las necesidades de la población, por otra. El informe de CORPOURABA afirma además que la organización pública en la región tiene una baja capacidad administrativa y operativa, y que "las inversiones en servicios básicos y de salud son deficientes en todos los casos" (20).

Los datos sobre servicios públicos y sociales en Urabá son bastante elocuentes al respecto (Cuadro No. 1). Igualmente dicentes son los resultados que arroja el informe de indicadores de pobreza, elaborado por el DANE, en lo que respecta a Urabá: todos los municipios de la zona superan los promedios tanto nacional como departamental (Antioquia) de pobreza y de miseria. La mitad de ellos tiene más del 50 por ciento de sus habitantes viviendo en la miseria. Finalmente, aunque Urabá sólo representa un 6.24 por ciento de la población antioqueña, contribuye en un 11.78 por ciento al total de personas con necesidades básicas insatisfechas del departamento, y en un 17.92 por ciento al total de personas en la miseria (Cuadro No. 2).

Así, resulta claro que son los empresarios bananeros quienes han recibido los beneficios que se pueden derivar de la presencia estatal en la región. Y esto gracias a que el Estado sí ha dejado sentir su influencia en dos sentidos: en primer lugar, como distribuidor de rentas institucionales hacia ellos "como corresponde a una economía de exportación protegida por las regulaciones propias del Estado en ese campo" (21). Y en segundo término, a través del apoyo militar a los propietarios para reprimir los conflictos que desde hace varios años se vienen insinuando en la región (22).

Como resultado de esta presencia traumática del Estado en Urabá, el desarrollo social de la

16. Estos son: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Mutatá.

17. *El Plan Social por la Paz...*, p. 18.

18. Comisión de Estudios sobre la violencia, *Colombia: Violencia y Democracia*. Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987, p. 198.

19. Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, CORPOURABA, "Plan de Desarrollo...", p. 13.

20. *Ibid.*,

21. William Ramírez Tobón, "Violencia y conflicto social...", p. 3.

22. No en vano se registran en la zona de Urabá un total de 36 hechos de represión colectiva cometidos contra campesinos en el periodo que va de 1970 a 1975, y la militarización, en el mismo periodo, de los municipios de Apartadó, Chigorodó, Mutatá y San Pedro de Urabá, así como de la región en su totalidad. Javier Sánchez Torres, et al., *Colombia Represión 1970-1981*, Bogotá, CINEP, 1982, Vol. I, ver cuadros de represión colectiva.

CUADRO No. 1

URABA - SERVICIOS PUBLICOS: % DE COBERTURA

Servicios \ Municipios*	Arboletes	Necocli	San Pedro de Urabá	Turbo	Apartadó	Chigorodó	Mutató
Acueducto	Más del 50	Más del 50	Más del 50	Más del 50	Más del 50	Menos del 50	Más del 50
Alcantarillado	Menos del 50	-0-	Más del 50	Menos del 50	Menos del 50	Menos del 50	Más del 50
Energía Eléctrica	Menos del 50	Más del 50	-0-	Más del 50	Más del 50	Menos del 50	Más del 50
Teléfono	Menos del 50	Menos del 50	50	Más del 50	Más del 50	Menos del 50	Menos del 50
Alumbrado público	Menos del 50	Más del 50	-0-	Menos del 50	Más del 50	Menos del 50	Menos del 50
Calles pavimentadas	Menos del 50	-0-	-0	Más del 50	Menos del 50	Menos del 50	-0-

SERVICIOS DE SALUD

Número de habitantes**	34.884	25.881	20.526	69.910	44.314	22.990	8.994
Hospitales	1	1	1	3	-	1	1
Puestos de Salud	6	5	1	5	-	1	4
Personal médico	5	5	3	20	45	8	2
Personal paramédico	16	15	3	51	107	15	3

* No aparecen Carepa y San Juan de Urabá por ser municipios recientemente creados.

FUENTE: El Plan Social por la Paz. Una estrategia de participación comunitaria, Bogotá, DANE-DAPRE, julio de 1986, pp. 18-20.

** Estos datos provienen del DANE, "Indicadores de Pobreza", 1988 (Ver Cuadro No. 2).

CUADRO No. 2

URABA
INDICADORES DE POBREZA

Depto., Región, Municipio	Total Personas	Personas con NBI*	%Personas con NBI	Personas Miseria (1)	%Personas Miseria (1)	%Personas NBI en total Deptal.
1. San Pedro de Urabá	20.526	18.743	91.3	17.482	85.2	1.21
2. Necocli	25.881	23.324	90.1	19.418	78.1	1.50
3. Arboletes	34.884	31.053	89.0	27.433	78.6	2.00
4. Turbo	69.910	54.015	77.3	37.032	53.0	3.48
5. Carepa	12.393	8.920	72.0	5.861	47.3	0.57
6. Mutatá	8.994	6.355	70.7	3.865	45.0	0.41
7. Chigorodó	22.990	15.746	68.5	9.861	43.6	1.01
8. Apartadó	44.314	24.745	55.8	12.821	29.0	1.59
9. San Juan de Urabá**	-	-	-	-	-	-
URABA	239.982	182.901	76.24	133.773	55.76	11.77
ANTIOQUIA	3.847.210	1.553.172	40.4	746.421	19.4	100.00
% Urabá con respecto a Antioquia	6.24	11.78		17.92		
TOTAL NACIONAL	27.575.023	12.561.239	45.6	6.238.072	22.8	

* Personas con NBI : Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas. Indicador de pobreza.

** El Censo de 1985 no tiene datos sobre este municipio que fue creado en 1986.

(1) Los indicadores y datos sobre miseria, hacinamiento, viviendas inadecuadas, dependencia, inasistencia escolar, servicios y el señalado de necesidades básicas insatisfechas, no abarcan personas en hogares indígenas.

Fuente: DANE, "Indicadores de Pobreza", 1988. (Listados de Computador), pp. 102-108.

región ha sido dejado en manos de un sector privado más interesado en drenar recursos que en reinvertir los excedentes en ella, y más ocupado en la rápida acumulación y concentración del capital que en la redistribución de ingresos a través del alza de los salarios reales y del mejoramiento de la infraestructura pública para beneficio de toda la población.

Dadas todas estas características, no es de extrañar que la violencia haya encontrado en la zona del golfo terreno abonado para crecer y prosperar. Dentro del panorama nacional, Urabá constituye un caso ilustrativo de violencia generada por procesos de desarrollo controlados exógenamente a una región con economía de enclave, mezclados con procesos de colonización campesina espontánea y desorganizada. El conjunto de conflictos sociales que han servido de base para el surgimiento de la violencia en la región, así como los detonadores que los han llevado a buscar su solución por las vías violentas, se analizan a continuación.

Historia del conflicto regional

Pese a la complejidad y la variedad de conflictos que atraviesan la sociedad de Urabá, es posible afirmar que el conflicto principal de la zona se manifiesta en el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores vinculados a la producción bananera. Esta, iniciada a finales de la década del cincuenta en el municipio de Turbo, se ha extendido paulatinamente a los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, los cuales constituyen hoy el escenario por excelencia del conflicto. Estos cuatro municipios abarcan en conjunto una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados (23) con una población que se acerca a los 150.000 habitantes (24).

El distrito bananero comprende unas 22 mil hectáreas de suelos fértiles localizados en los valles bajos de los ríos que corren desde la Serranía de Abibe hasta desembocar en la costa oriental del Golfo de Urabá. Las 267 plantaciones de banano emplean aproximadamente 20.000 personas distribuidas entre las labores de campo, corte y empaque, los trabajos oca-

sionales, las funciones administrativas, la comercialización, la fábrica de cartón y el transporte (25).

El conflicto que se desarrolla en la zona bananera de Urabá debe definirse fundamentalmente como el enfrentamiento entre dos grupos sociales (empresarios y trabajadores agrícolas) alrededor de la distribución de los beneficios generados por la producción del enclave bananero. A lo largo de su desarrollo, este conflicto básico ha ido entremezclándose con otros ingredientes, de tipo social y político, que le dan una creciente complejidad, así como también ha ido incorporando nuevos actores en ambos polos de la confrontación. Su agudización creciente lo ha llevado al estallido violento sin que hasta ahora hayan aparecido perspectivas de solución por las vías pacíficas.

Pese a que el esquema implantado por la United Fruit Company para iniciar la producción bananera en la zona del golfo fue bien diferente a aquél desarrollado en las plantaciones del Magdalena (26), los empresarios nacionales, sujetos también a las exigencias de la producción para el mercado exterior, no tardaron en poner en vigencia sistemas de trabajo ampliamente desfavorables para los trabajadores migrantes que rápidamente llegaron a la región atraídos por la promesa del milagro bananero.

El salario por jornal o a destajo, la inexistencia de la jornada laboral legal, la ausencia total de prestaciones sociales, la utilización de contratistas independientes para evadir obligaciones laborales, la no remuneración de horas extras, dominicales y festivos, y en general, el desconocimiento de las normas laborales por parte de los empresarios, con la complicidad del Ministerio de Trabajo en muchas ocasiones (27), marcaron el período inicial de las nuevas relaciones de producción capitalista, signado por la sobreexplotación del trabajo.

23. *El Plan Social por la Paz...*, pp. 18 y 19.

24. Ver Cuadro No. 2. Urabá - Indicadores de pobreza.

25. De estas 20.000 personas, aproximadamente 150 desempeñan funciones administrativas: 1.600 son personal de mandos medios; 12.500 son trabajadores directos permanentes; 500 son trabajadores ocasionales; 3.000 trabajan en los sistemas de comercialización y en la fábrica de cartón; y 1.300 en el transporte. Ver Gerard Martin, "Desarrollo Económico...", pp. 26-29, y Julián Delgadillo, "La violencia en Urabá"..., s. p.

26. Ver nota No. 13.

27. Gerard Martin, "Desarrollo Económico...", pp. 30-32.

Esta sobreexplotación fue posibilitada gracias al poder y la autonomía acumulados por el núcleo de empresarios que, organizados desde 1963 en un poderoso gremio de productores (AUGURA), lograron inhibir cualquier forma defensiva del salario frente a una masa trabajadora débil en su organización para la defensa de sus intereses. El Estado permitió el control del capital sobre sus propias márgenes de distribución social e intervino únicamente en coyunturas conflictivas en las que puso su fuerza a disposición de los propietarios y empresarios.

No obstante, varias circunstancias habrían de forzar el desarrollo de un amplio y fuerte movimiento sindical. En primer lugar, es necesario señalar que las condiciones de trabajo sumadas al mal estado de los campamentos y de la infraestructura de la zona en general, constituyeron un denominador común que movió a los trabajadores a organizarse. En segundo lugar, la cercanía de las fincas y la alta concentración de trabajadores en un área limitada facilitaron también la organización obrera. Finalmente, dada la inexistencia de especialización en las labores de campo, corte y empaque, fue posible una relativa homogeneidad de la clase trabajadora que seguramente debió contribuir al surgimiento de la actividad sindical (28). Los sindicatos comenzaron a formarse desde 1964. El primero fue el Sindicato de Trabajadores Bananeros, SINTRABANANO, afiliado a la Federación de Trabajadores de Antioquia (FEDETA) y a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC). Luego le siguió el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, SINTAGRO, que se conformó como sindicato independiente. En 1973 se creó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Frutera SINALTRAIFRU, afiliado a la Federación Sindical de Trabajadores de Antioquia (FESTRAN) y a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En 1977 los trabajadores de la empresa EXPOBAN formaron un nuevo sindicato de base, SINTRAEXPOBAN, afiliado a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). Hacia 1978 surgió SINDEJORNALEROS como sindicato independiente (29). Además de estos cinco, a lo largo de las últimas dos décadas han

surgido varios sindicatos más, no solo en las plantaciones sino en las demás actividades relacionadas con la producción bananera (30).

Sin embargo, la mayoría de los sindicatos debieron actuar clandestinamente durante la primera década de producción bananera ante la represión desatada por los empresarios frente a los intentos organizativos y reivindicativos de los trabajadores. La persecución sindical en todas sus formas (despidos, detenciones, amenazas, asesinatos), la militarización de las fincas bananeras, la introducción de contratistas para sabotear la lucha sindicalizada, la firma de pactos colectivos sin intermediación de los sindicatos, el incumplimiento de convenciones colectivas e incluso la compra de pliegos de peticiones, fueron algunas de las modalidades utilizadas por los propietarios para debilitar el movimiento sindical (31).

A esta reacción empresarial frente a los trabajadores, debe sumarse la ausencia del Ministerio de Trabajo en Urabá, vacío que fue llenado por la presencia militar y la consiguiente solución de los conflictos laborales por la fuerza.

Esta primera ola de represión y persecución sindical no debe dejarse de lado en la explicación de la posterior radicalización de los obreros de la zona bananera. Pero además hay otras razones que explican el paso de los trabajadores asalariados de la pasividad reivindicativa a la presentación de progresivas demandas no solo económicas sino también sociales y políticas.

La primera se refiere a la "voracidad de un capitalismo salvaje, incapaz por sí mismo de racionalizar el empleo del factor trabajo", por lo cual recurre no solo a la sobreexplotación del mismo sino crecientemente a la represión violenta, para terminar "exacerbándolo y forzándolo al antagonismo" (32).

30. *Ibid.*

31. La historia de la represión sindical en Urabá está ampliamente documentada en el trabajo de Gerard Martin, "Desarrollo Económico...", pp. 42-46. Ver también Camilo Castellanos, "La encrucijada de Urabá", en *Cien días*, No. 2, abril-junio de 1988, pp. 6 y 7, e Iván Darío Osorio, *Historia del sindicalismo...*, pp. 111 y 112.

32. William Ramírez Tobón, "Violencia y conflicto social...", p. 7.

28. *Ibid.*, p. 41.

29. Iván Darío Osorio, *Historia del sindicalismo antioqueño 1900-1986*. Medellín, IPC-SINPROEAFIT y otros, sin fecha.

La segunda tiene que ver con la complejidad social de la región. Su población, en constante aumento y diversificación cultural gracias al variado origen regional de los migrantes, exige cada vez mayores niveles de distribución de los excedentes producidos por la agroindustria del banano. Tal exigencia tiene que ver no solo con las expectativas de los migrantes que llegaron a la zona en busca de mejores condiciones de vida, sino también con el evidente desfase existente entre el vigoroso desarrollo económico de la industria agroexportadora frente al pobre desarrollo de la región en lo que concierne a la calidad de vida de sus habitantes.

Finalmente, la evolución de la actividad sindical hacia progresivas demandas en todos los órdenes, especialmente en el político, tuvo que ver con la extensión hacia esa zona de la influencia de los grupos guerrilleros y las organizaciones políticas de izquierda. El Ejército Popular de Liberación, EPL, creado en las montañas de Antioquia a mediados de la década del sesenta (33), no tardó en extender su radio de acción desde el Alto Sinú y el Alto San Jorge hacia la región cercana de Urabá. Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también decidieron crear un frente en Urabá (el V frente), como parte de su proceso de expansión hacia las zonas de colonización campesina en el país (34). Ambas organizaciones armadas encontraron allí una base social propicia para su trabajo político y comenzaron a echar raíces en la región (35). A su vez, los campesinos y trabajadores agrícolas, permanentemente asediados por un núcleo de propietarios que no dejaban

margen para las actividades reivindicativas y sindicales legales, encontraron un apoyo bien fuera tácito o explícito en estas dos agrupaciones armadas.

El proceso de paz y apertura democrática desarrollado a lo largo de la administración Betancur (1982-1986) tuvo efectos notables en el alineamiento político de las fuerzas en la región. En primer lugar, una relativa apertura en materia laboral, permitió el fortalecimiento del movimiento sindical. Por primera vez en más de veinte años de producción se habló en la zona bananera de libertades sindicales, de la legalidad de los paros y de la presentación de pliegos de peticiones. Por primera vez en muchas fincas se empezaron a aplicar las normas laborales vigentes para el resto del país: el salario mínimo, la jornada legal, el régimen de horas extras y la contratación colectiva (36). Como resultado de esta coyuntura, no solo creció rápidamente la afiliación a los sindicatos sino que aumentaron considerablemente las negociaciones colectivas. Paralelamente con este auge del movimiento sindical se produjeron las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, en las cuales participaron tanto el EPL como las FARC. Durante la época en que estuvieron vigentes los acuerdos de paz, entre 1984 y finales de 1985, ambos grupos guerrilleros intentaron ampliar sus nexos con los movimientos populares, alentados por la tregua y por la perspectiva de participación en el escenario de la política legal. Así, dos organizaciones políticas de izquierda surgidas durante el proceso de paz, la Unión Patriótica y el Frente Popular, lograron en poco tiempo consolidar una presencia significativa en la región y establecer lazos con los trabajadores bananeros.

Estos cambios produjeron un movimiento reactivo por parte de los empresarios que veían en el fortalecimiento organizativo y político de los sindicatos una amenaza contra su control sobre el proceso de producción y apropiación de los excedentes. Así como también se produjo una reacción por parte de los latifundistas defensores del *statu quo* anterior y del otrora hegemónico partido liberal ante la competencia que le surgía por la existencia de nuevas fuerzas políticas.

33. Sobre la historia del EPL, ver Eduardo Pizarro, "La guerrilla revolucionaria en Colombia", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (comp.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1986.

34. William Ramírez Tobón, "La guerrilla rural en Colombia: una vía hacia la colonización armada?", en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Volumen 4, No. 2, mayo-agosto 1981.

35. Aunque ambos grupos guerrilleros han estado presentes en la región, la presencia del EPL ha sido y sigue siendo mucho más significativa que la de las FARC. Así, en 1985 el EPL protagonizó 20 acciones armadas y las FARC una; en 1986, 25 fueron atribuidas al EPL, y una a las FARC; en 1987, el EPL participó en 17 y las FARC en 3. Datos obtenidos en la Oficina del Consejero Presidencial para la Rehabilitación, la Normalización y la Reconciliación, 1988. Además, se puede afirmar que, aunque en algunas épocas ha existido rivalidad e incluso enfrentamientos entre los dos grupos, desde 1987 y a raíz de la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, se ha producido un acercamiento entre ellos en la zona.

36. *Semana*, No. 315, 17-23 de mayo de 1988, p. 32. Ver también Gerard Martin, "Desarrollo Económico...", pp. 58-68.

El progresivo deterioro del proceso de paz significó un retroceso en lo que respecta a la apertura política y laboral que se había producido en Urabá durante la tregua. La reanudación de las hostilidades entre los polos en conflicto no solo perjudicó el clima favorable para las negociaciones entre patrones y sindicatos, sino que volvió a cerrar las puertas a la ampliación de los espacios políticos que se habían abierto en algún grado en la zona, como en el resto del país. La polarización creciente de las fuerzas sociales de la región, producto del deterioro del proceso de paz se convirtió en el detonante que las llevaría de nuevo a buscar la solución de los conflictos por las vías violentas. La guerrilla, en particular el EPL, retornó a su condición clandestina y reanudó el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Desde entonces, sus acciones no han dejado de ser asociadas con el movimiento sindical y los grupos políticos de izquierda. Esta supuesta identidad guerrilla-sindicatos-agrupaciones políticas, asumida por los sectores dominantes de la región, ha actuado como ingrediente fundamental en la guerra sucia desatada desde 1985 contra los trabajadores, líderes sindicales y militantes políticos de Urabá. Posiblemente, en la realidad también se haya producido un acercamiento mayor entre estos tres sectores dada la polarización creciente, producto de la agudización del conflicto.

Así, el conflicto socioeconómico básico entre empresarios y trabajadores ha resurgido con especial dramatismo en los últimos tres años, agravado por una circunstancia: ahora, ambos actores se enfrentan apoyados por aparatos armados. Los empresarios capitalistas han buscado y logrado el apoyo de otros sectores de las clases dominantes regionales (los latifundistas ganaderos) que se sienten igualmente amenazados por el nuevo ordenamiento de fuerzas en la región. A lo que se ha venido a sumar otro factor fundamental, causa de la violenta agudización del conflicto: la penetración del capital del narcotráfico a través de la compra de tierras, fenómeno que se viene verificando en otras regiones del territorio nacional (la Costa Atlántica, el Magdalena Medio, el Meta, etc.). Los narcotraficantes, en su calidad de terratenientes y no ya de productores-exportadores de cocaína, ponen sus ilimitados recursos en favor de la defensa de un *statu quo* regional, desplegando formas de violencia

superiores a las hasta ahora conocidas en el país. Es así como en Urabá se han ido formando diversos grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte" (37) financiados y entrenados por la alianza empresarios-ganaderos-narcoterratenientes para enfrentar lo que se percibe como el enemigo común: la alianza guerrilla-trabajadores bananeros-grupos políticos de izquierda.

Los trabajadores, sin duda, también han convocado y logrado el apoyo de las fuerzas ya presentes en la región interesadas en subvertir el ordenamiento socioeconómico y político vigente. En una carrera vertiginosa hacia la polarización y la guerra abierta se ven arrastrados, junto con la guerrilla, no solo los trabajadores y líderes sindicales, sino también los miembros de las agrupaciones políticas de izquierda, la UP y el Frente Popular, y un número cada vez mayor de sectores inermes de la población. En 1985 comenzaron los atentados contra los sindicatos, fue bombardeada la sede de SINTAGRO y los muertos en las calles de los municipios bananeros comenzaron a ponerlos los sindicalistas (38). Durante el año de 1986 se dieron en Urabá un total de 44 hechos represivos (desapariciones, amenazas, asesinatos, detenciones arbitrarias), cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, paramilitares y desconocidos contra un variado grupo de víctimas. Entre ellas se contaban un administrador de finca, un dirigente cívico juvenil, dos miembros del Partido Liberal, cuatro militantes y dirigentes de la UP, varios trabajadores de las haciendas, numerosos campesinos, diez miembros de sindicatos y otras víctimas que no corresponden a categorías definidas (39). Para 1987 "más de doscientas personas fueron asesinadas en la región de Urabá. Las víctimas fueron

37. De los 140 grupos paramilitares identificados y cuya existencia fue reconocida por el gobierno en 1987, actuarían en Urabá los siguientes: la Juventud Anticomunista de Colombia (JACOC), de cobertura nacional; Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), cuyo radio de acción es Antioquia; y, Muerte a Revolucionarios de Urabá (MUR), con sede en la región. *El Espectador*, 1 de octubre de 1987, pp. 1A y 13A. La masacre ocurrida el 4 de marzo de este año en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, fue reivindicada por el Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, MOENS. *Semana*, edición No. 305, 8-14 de marzo de 1988, pp. 22-23.

38. *Semana*, No. 315..., p. 32.

39. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, "Itinerario de la represión y la violencia institucionalizadas. Colombia 1986", Bogotá, C.P.D.H., 1987.

en su mayoría dirigentes sindicales y trabajadores bananeros, pero también murieron administradores de haciendas, activistas políticos locales y un párroco" (40). Según estadísticas oficiales, en el período que va desde enero de 1986 hasta enero de 1988, se cometieron en Urabá 55 asesinatos políticos: 51 contra miembros de la UP y 4 contra miembros del Partido Liberal (41). Finalmente, la última modalidad de la violencia en la región es la del asesinato colectivo o masacre, cometida contra grupos de trabajadores agrícolas sindicalizados o militantes de alguno de los grupos políticos de izquierda ya mencionados (42). Los anteriores datos llevan indudablemente a la conclusión de que el rango de víctimas de la violencia en Urabá se ha ampliado dramáticamente.

Los polos en conflicto se han embarcado en la dinámica de la violencia, convencidos de que ella constituye, ante la ausencia de una mediación eficaz por parte del Estado, la única solución de las contradicciones que los enfrentan, especialmente aquella en torno a la apropiación y distribución de los beneficios producidos por la industria bananera. La guerrilla ha creído que mediante la utilización de métodos como el secuestro, la "vacuna", el "boleto" y la extorsión podía lograr una extracción forzosa de excedentes que eventualmente serían redistribuidos, si bien indirectamente, a la población. Los trabajadores, llevados en parte por lo agudo del conflicto, se han acercado a este polo en la percepción de su solución. Por otra parte, los empresarios, fortalecidos por el apoyo que logran de otros sectores en la región (ganaderos y narcotraficantes) y la aprobación tácita si no explícita de las autoridades civiles y militares, han pretendido defender la acumulación y concentración del capital inhibiendo, mediante la intimidación, la movilización y la lucha obrero-campesina, o destruyendo violentamente el nexo que pueda unir a la guerrilla con el movimiento sindical. Las masacres colectivas de trabajadores sucedidas entre marzo y abril del presente año (43), van precisamente dirigidas

hacia el logro de estos dos objetivos (generalización del terror y destrucción del nexo guerrilla-población campesina y obrera) y resultan como consecuencia de la ineficacia que, para el logro de tales propósitos, ha demostrado el asesinato selectivo de trabajadores, líderes sindicales y activistas políticos.

Ambas soluciones han resultado altamente ineficaces en lo que respecta a la consecución de los objetivos de cada uno de los adversarios en conflicto pero en cambio sí han llevado a un crecimiento acelerado de la violencia que amenaza no solo la supervivencia de la producción bananera sino la de la región entera.

Urabá es hoy el escenario de un enfrentamiento sangriento que abarca porciones cada vez mayores de la población y amenaza con involucrar dentro de su dinámica el desarrollo de otros conflictos secundarios como el que se desenvuelve entre los diferentes grupos culturales presentes en la región (antioqueños, chozanos, cordobeses e indígenas); o el que enfrenta a los pequeños campesinos en la lucha por la tierra con la ganadería extensiva en expansión y con la creciente presencia del capital del narcotráfico; o el que produce la creciente migración de campesinos desplazados por la agroindustria y el latifundio hacia los centros urbanos (como Apartadó), cada vez más incapaces de absorber población y ofrecerle los servicios públicos y sociales básicos.

Ante esta situación, el Estado ha permanecido aparentemente neutral, como espectador ajeno al conjunto de conflictos que parecen haber desbordado su capacidad de mediación. Sin embargo, el papel que ha cumplido como distribuidor de recursos hacia los empresarios bananeros, sumado a su creciente presencia en cuanto fuerza represiva (44), apuntan a demostrar que lejos de permanecer neutral frente al

40. Amnistía Internacional, "Colombia: una crisis de derechos humanos", 1988, p. 14.

41. Oficina del Consejero Presidencial para la Rehabilitación, la Normalización y la Reconciliación, 1988.

42. Ver *Semana*, Nos. 305, 310, 311, 313 y 315 de 1988.

43. La primera masacre ocurrió el 4 de marzo de este año en las fincas "Honduras" y "La Negra", en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo. En ella murieron 28 trabaja-

dores agrícolas, afiliados a SINTAGRO y supuestos militantes del Frente Popular. La segunda ocurrió un mes después, en el corregimiento de Coquitos del mismo municipio. En ella murieron 27 trabajadores, supuestos invasores de haciendas bananeras. *Semana*, No. 305..., p. 22 y No. 311, 19-25 de abril de 1988, pp. 28-29.

44. Urabá es desde hace varios años una de las regiones más militarizadas del país. Allí han tenido asiento el Batallón Voltigeros, la Décima (X) Brigada y desde abril del presente año, el Comando bajo la dirección del mayor general Jesús Armando Arias Cabrales, como jefe militar de la zona.

conflicto, el Estado sí ha intervenido en forma parcializada en favor de los intereses del capital. Dos hechos recientes confirman la afirmación anterior: en primer lugar, el documento elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, acerca de la investigación por el genocidio de trabajadores en Currulao. En él, si bien no se confirma la participación activa de las Fuerzas Armadas en las masacres, sí se afirma que elementos pertenecientes al Batallón Voltígeros participaron en una serie de operativos de identificación y reconocimiento de supuestos miembros de la red de apoyo del EPL, la mayoría de los cuales murió en las matanzas (45). En segundo lugar, el nombramiento reciente de un Jefe militar con poderes absolutos para la región, no deja de indicar la inclinación del gobierno a favor de las soluciones militares del conflicto (46). Este hecho sienta por demás un precedente preocupante para la "pacificación" futura de otras regiones altamente conflictivas en el país. Pero además indica la existencia de profundas contradicciones y ambigüedades en el actual gobierno, las mismas que se adivinaron desde que se acuñó la fórmula de "la mano tendida y el pulso firme". Por un lado aparecen la inclusión de la zona de Urabá en el Plan Nacional de Rehabilitación y el apoyo que el gobierno le dio a la elección popular de alcaldes y demás medidas descentralizadoras, aun en momentos álgidos del conflicto. Por el otro, y en contravía con el primero, están los operativos militares de gran magnitud adelantados recientemente en San Pedro de Urabá con un alto índice de víctimas entre la población civil (47), hecho que contradice cualquier intento de reconciliación y rehabilitación en la zona, así como la Jefatura Militar de Urabá que desvirtúa totalmente el espíritu de la reforma política.

Para retomar la tesis central de este trabajo, es preciso resaltar de nuevo que el conflicto bási-

co que ha producido el estallido de la violencia en Urabá es de vieja data, gestado a partir de un desarrollo regional desequilibrado producto de la implantación de una economía de enclave, extractiva de capital y generadora de pobreza. Paralelamente, se han desarrollado en la región conflictos de índole social y política que hacen aún más compleja la situación. Por lo tanto, una perspectiva de solución a largo plazo para Urabá debe dejar de lado la percepción militar del conflicto y ocuparse prioritariamente de tres aspectos: en primer lugar, de la desactivación y neutralización de los actores armados (guerrilla y paramilitares) mediante políticas de negociación y la administración pronta y eficaz de la justicia; en segundo lugar, de la puesta en vigor de las normas laborales existentes en el país, para regresar el conflicto entre empresarios y trabajadores al cauce de la negociación legítima, dentro de los límites de un desarrollo capitalista regulado por el Estado; finalmente, de la reinversión en la región de los beneficios producidos por el enclave bananero procurando una profunda redistribución del ingreso que elimine los desequilibrios intrarregionales y lleve las condiciones de vida de la población a niveles compatibles con el crecimiento de la industria bananera. Se trata, sobre todo, de «generar medidas de confianza» con el fin de deslegitimar el uso de la violencia y crear un ambiente favorable para un eventual acuerdo regional para la paz.

La propuesta de tal acuerdo regional, que tendría un indudable efecto de demostración sobre otras regiones en conflicto, ya ha sido acogida por la Iglesia y algunos miembros del gremio bananero. En él deberían participar el mayor número de representantes de las fuerzas sociales presentes en la zona, de manera que pueda darse una negociación ampliada en búsqueda no solo de poner fin a la violencia, sino de implantar un nuevo modelo de desarrollo económico para la región en el marco de una verdadera ampliación de los espacios democráticos.

45. *Semana*, No. 313, 3-9 de mayo de 1988, pp. 26-35.

46. Al respecto ver Ana María Cano Posada, "Banana Republic", en *El Espectador*, abril de 1988, p. 4A; María Jimena Duzán, "El Virreinato de Gómez Barros", en *El Espectador*, abril de 1988, pp. 2A y 3A; y Alfredo Vázquez Carrizosa, "¿El gobierno militar?", en *El Espectador*, 26 de abril de 1988, p. 3A. El 20 de junio el gobierno nombró al mayor general Jesús Armando Arias Cabrales en remplazo del mayor general Fernando Gómez Barros, quien se retiró de esa posición. *El Espectador*, 21 de junio de 1988, pp. 1A y 12A.

47. *Semana*, No. 319, 14-20 de junio de 1988, pp. 42-43.

